

TRIBUNA ABIERTA

OTRA VEZ LAS BECAS



ADOLFO L.
GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ

Profesor de la
Universidad de Sevilla

Parecen algo ya crónico los enfrentamientos por las becas, gobierne quien gobierne. Tal vez haya algo que falta y que es muy necesario para gobernar: el diálogo

HAY en la política dos temas que siempre están de actualidad y en los que los distintos partidos gobernantes, sea la izquierda o sea la derecha, presentan sus posturas, positiva el que está en el poder y negativa el que se encuentra en la oposición. Estos asuntos, que llegan a ser cansinos —bueno, la política, salvo raras excepciones, es actualmente bastante cansina—, son las pensiones en el terreno de lo social y las becas en el ámbito educativo. Sobre estas últimas, voy a referirme a las universitarias, presentadas a bombo y platillo por el Ministerio de Educación y criticadas fuertemente por la comunidad universitaria, especialmente rectores y estudiantes.

Si tomamos el programa electoral del Partido Popular y leemos lo que dice sobre estas becas, nos encontramos con afirmaciones como esta: «Impulsaremos un sistema de becas que potencie la excelencia y la igualdad de oportunidades en los estudios universitarios, como factor clave para el éxito de una sociedad». O esta otra: «Adaptaremos el sistema de becas a la nueva realidad del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), garantizando que los estudiantes puedan elegir libremente carrera y universidad, con arreglo a su mérito y capacidad, estimulando además la competencia entre nuestros centros de enseñanza superior». ¿Quién puede ver algo negativo o fuera de lugar en estas frases y en estos deseos programáticos? Entonces, ¿qué ha pasado para que se forme este enfrentamiento entre la comunidad universitaria y el Ministerio de Educación, representado, en esta ocasión, por la secretaria de Estado, señora Góndomo, en el último Consejo de Universidades?

Es de suponer que las autoridades educativas ministeriales se han puesto a cumplir el programa electoral que les dio la victoria y además con mayoría absoluta. Y ellos así lo defienden, dando unos datos positivos que son absolutamente apabullantes. Veamos: los becarios universitarios han alcanzado la cifra de 322.000, lo que supone unos 23.000 más

que el año pasado; no está nada mal. El presupuesto para este capítulo ha aumentado unos 250 millones de euros más, alcanzando la cifra de 1.411 millones, el más alto conocido hasta el momento. Las becas concedidas han subido de un 54,46% al 59,6%, porcentaje a todas luces nada despreciable. La nota media de los becados ha pasado de 6,8 a 7,4. Y, finalmente, las denegaciones por no tener suficiente nota han bajado del 21,2% al 16,4%. O sea, el programa se cumple y estas cifras, por más que se las intente criticar, no admiten discusión. Es la actuación positiva antes señalada por los que ostentan el poder gubernamental.

¿Qué es lo que pasa, pues, para que se produzcan estas fuertes discusiones entre las autoridades políticas y los máximos representantes académicos, a los que se han unido los estudiantes? ¿Por qué aparece esa dura crítica negativa? Pues la razón se encuentra, a mi modesto entender, en la propia actuación ministerial, que con los datos anteriores lleva a cabo actuaciones, afirmaciones e incluso otras cifras que permiten resaltar los aspectos negativos en los que se basan sus principales opositores. Así, las becas medias han perdido 277 euros, justificado por el mayor número de alumnos y las mejores notas obtenidas. Bien está la justificación, pero los cerca de 300 euros menos para muchas familias representan mucho dinero, que les resulta muy difícil pagarlo. La desafortunada afirmación de que las becas «han dejado de ser un derecho para convertirse en una ayuda por la que se compite» es impresentable, pues las becas son un derecho por ley, y no hay otra ley que lo niegue. La opacidad a la hora de establecer las baremaciones y demás requisitos exigibles a los

estudiantes y denunciados por éstos, es algo incomprensible que se produzca con los avances informáticos. Y el crónico problema del cobro de la beca —a estas alturas muchos se quejan de que no las han recibido todavía— es algo realmente bochornoso.

La verdad, parece incomprensible que estas cosas sucedan. Sin duda, el esfuerzo en las circunstancias en las que se encuentra España lo ha realizado el Ministerio. Los datos positivos así lo atestiguan. Pero que con estos datos aparezcan otros de facilísima solución y que tiren al traste con todo lo trabajado, porque verdaderamente también confirman situaciones muy negativas que dificultan la actividad

cotidiana universitaria, es realmente inaceptable.

Como dije al principio, parecen algo ya crónico los enfrentamientos por las becas, gobierne quien gobierne. Tal vez haya algo que falta y que es muy necesario para gestionar y, en consecuencia, gobernar. Me refiero al diálogo y a los acuerdos previos para cualquier decisión. Esperemos que esto se resuelva positivamente, aunque sea otra vez dando marcha atrás y corrigiendo los errores. La comunidad universitaria española lo agradecerá y la formación superior en España ganará sin duda alguna.





En Sevilla, los rectores extienden su proclama a la Junta de Andalucía

► La hacen responsable, junto al Gobierno, de la «descapitalización» científica y de personal de las universidades

P. G.
SEVILLA

Los rectores de las tres universidades públicas con sede en Sevilla —Hispalense, UPO y UNIA— lanzaron ayer un «grito de ayuda» a los poderes públicos, con motivo de la lectura del manifiesto de la CRUE, un acto que desvincularon de cualquier «sesgo político» o electoral. «A ambos gobiernos (central y autonómico) les estamos pidiendo que muevan ficha en defensa de la universidad pública», recalcó Antonio Ramírez de Arellano, quien consideró que para abordar una reflexión sobre el actual modelo universitario «no se pueden prolongar indefinidamente» unas medidas de carácter excepcional o coyuntural.

Los rectores confesaron sentirse «decepcionados» después de casi tres años «atendiendo las sucesivas medidas» de los poderes públicos y encontrarse ahora con una situación que «ya no es prácticamente sostenible», se-

gún apuntaba desde la UPO Vicente Guzmán.

Todo ello lo refrendaron con datos como el descenso de un 40% en la financiación de la investigación, «se ha perdido un ejercicio económico en su totalidad»; la práctica paralización de la promoción interna —entre la Hispalense y la UPO suman unos 400 profesores acreditados, más de 300 la primera de ellas, sin posibilidad de promoción por los ajustes y la tasa de reposición del Gobierno—; el descenso de un 15% de media en el presupuesto de las universidades andaluzas, o la bajada registrada en las cuantías de las becas. A modo de ejemplo, señalaron que en la Hispalense de una ayuda máxima de 6.200 euros en 2013 se ha pasado a unos 5.280 euros para un alumno con 9,5 de nota y en el umbral de renta más bajo. Asimismo, de los 20 becarios con mejores calificaciones, catorce han percibido este año menos

**«Autonomía secuestrada»
«Que nos devuelvan nuestra
autonomía secuestrada
en manos de los
gobiernos», reclamaron**

dinero que el anterior y tres no han recibido aún contestación.

Dentro de este contexto, tendente a la «descapitalización científica y de personal», los rectores criticaron las medidas del Gobierno central y sus efectos en los colectivos con menor renta, al tiempo que recordaron los deberes de la Administración andaluza, «responsable de ofrecer un panorama claro de financiación» y del sistema andaluz. «Tiene que hacerlo cuanto antes; ser valiente y asumir responsabilidades», apuntó Ramírez de Arellano, quien no pasó por alto tampoco la adecuación de los precios de los másteres a la realidad económica —son casi tres veces más caros que los grados— o la reiterada petición de la Hispalense para el concurso de 40 plazas de ayudante doctor, «bloqueado —dijo— por razones administrativas».

Los rectores realizaron, a su vez, un llamamiento a que el diálogo con los ministerios «sirva para algo», tras asegurar que no se ha avanzado nada al respecto. «Que nos devuelvan nuestra autonomía secuestrada en manos de los gobiernos y se nos permita gestionar las universidades en condiciones de normalidad», concluyeron.